



Tribunal Administrativo de Boyacá

Despacho 5

Magistrada Ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz

Tunja, siete (07) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Accionante: William Cruz Forero

Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Expediente: 15001-2333-000-2017-00428-00

Acción: **Tutela**

Ingresa el expediente con informe secretarial de 07 de junio de 2017 (fl. 44), en el cual se indicó que el expediente proviene de la Oficina Judicial de reparto para proveer sobre su admisión.

*Se decide sobre la admisión de la **acción de tutela** instaurada por William Cruz Forero promovida contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a acceso a cargos públicos a través de concurso de mérito, trabajo y mínimo vital.*

Motiva la interposición de la presente acción, la inminente llegada de la persona que ocupó el primer puesto en el Concurso de méritos convocado por el Acuerdo CSJBA09-168 de 9 de septiembre de 2009, al cargo que ocupa el accionante en provisionalidad, y la creación de otro cargo que corresponde al mismo grado, pero de nivel Técnico efectuada por Acuerdo PSAA15-10402 de 1-29 de octubre de 2015, cargo en el cual, de ser publicado, pretende sea nombrado, en tanto ocupó el segundo lugar del concurso convocado por Acuerdo CSJBA09-168 de 2009, para el cargo de Profesional Universitario Grado 11 que lo hace apto para ejercer el cargo recientemente creado.

Competencia.

El numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, en su inciso 1º establece:

*“**ARTICULO 1º-** Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:*

Accionante: William Cruz Forero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Expediente: 15001-2333-000-2017-00428-00
Acción: Tutela

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.”

En este caso se promueve la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, entidad de orden nacional, por lo tanto, este Tribunal es competente para conocer de la presente acción contra la entidad accionada referida.

Admisión de la acción.

Toda vez que la solicitud de tutela reúne las exigencias de ley y que el Despacho es competente para conocer de ella será admitida y se comunicará a la entidad accionada para que se pronuncie sobre los hechos, pretensiones y ejerza su legítimo derecho a la defensa.

Sobre la medida cautelar.

En relación con las medidas provisionales el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 establece:

*“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, **cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho**, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.*

*Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y **no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.***

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.” Resaltado fuera de texto.

Ahora bien, en lo que respecta a la suspensión de un concurso de méritos como medidas cautelares, la Corte Constitucional¹ ha señalado:

“Este tribunal ha aclarado que las órdenes que puede impartir un juez de tutela pueden ser de diverso tipo, ya que la decisión a adoptar tiene que ser

¹ Sentencia T-604 de fecha 30 de agosto de 2013. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

Accionante: William Cruz Forero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Expediente: 15001-2333-000-2017-00428-00
Acción: Tutela

suficiente y razonable para lograr que la situación de vulneración cese. En este sentido la sentencia T-418 de 2010 estableció que:

“El juez de tutela cuenta con una facultad amplia para establecer, razonablemente, cuáles son las órdenes que se deben adoptar en cada uno de los casos concretos para asegurar el goce efectivo de un derecho fundamental. La principal misión que la Constitución encomienda al juez de tutela es tutelar los derechos que considera que han sido violados o amenazados y tomar las medidas necesarias para que tal situación cese. En tal medida, ha considerado la jurisprudencia que se pueden distinguir dos partes constitutivas del fallo: la decisión de amparo, es decir, la determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la acción de tutela, y la orden específica y necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho amparado”.

Entre las facultades que posee el juez para lograr la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, se encuentra la de dictar órdenes simples o complejas. Estas han sido definidas de la siguiente manera:

“el juez está llamado a tomar las medidas que se requieran para que, en realidad, la persona afectada pueda disfrutar de su derecho. Una sentencia de tutela no puede quedar escrita, tiene que materializarse en conductas positivas o negativas a favor de las personas cuyo derecho fue amparado. El remedio al que recurre un juez constitucional para salvaguardar un derecho, en ocasiones no supone órdenes simples, ejecutables en un breve término mediante una decisión única del destinatario de la orden, sino órdenes complejas.”²

En desarrollo de estas atribuciones el juez de tutela cuenta con diversas herramientas jurídicas para resolver un caso que requiere soluciones complejas, entre ellas se destacan: (i) la adopción de medidas cautelares en casos en los que se demuestre la existencia de perjuicio irremediable³; (ii) la realización de estudios en aquellas oportunidades en que no se cuenta con la información requerida para poder tomar la decisión;⁴ (iii) la capacidad de ordenar la construcción o terminación de obras⁵; (iv) la potestad de ordenar el asesoramiento de los accionantes⁶; (v) suspender trámites administrativos⁷; (vi) ordenar la creación de grupos de trabajo; (vii) conceder espacios de participación⁸; y (viii) decretar la suspensión de concursos de méritos.⁹”

5.2. Sobre este último aspecto se debe destacar que de conformidad a la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela puede ordenar la suspensión de un concurso de méritos, ya sea como medida cautelar antes de adoptar una decisión de fondo, o por el contrario, puede decretar dicha interrupción como una orden definitiva en la sentencia. (Resaltado fuera de texto.)

La medida provisional, calificada como de urgencia, fue propuesta por la accionante en los siguientes términos:

² Sentencia T-086 de 2003.

³ Auto 244 de 2009.

⁴ Sentencia T-1104 de 2005.

⁵ Sentencia T-081 de 2013.

⁶ Sentencia T-091 de 2010.

⁷ Sentencia T-974 de 2009.

⁸ Sentencia T-140 de 1995.

⁹ Sentencia T-286 de 1995.

Accionante: William Cruz Forero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Expediente: 15001-2333-000-2017-00428-00
Acción: Tutela

*“Que se ordene a la Sala ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE BOYACÁ, que de forma **INMEDIATA** deje sin efectos la RESOLUCIÓN No. CSJBR15-175 (...) entre tanto se publique la TOTALIDAD de sedes y cargos vacantes de conformidad con la convocatoria ofertada mediante Acuerdo de Convocatoria CSJ09-168 de 2009; evitando un perjuicio irremediable en atención a los derechos fundamentales violados, toda vez que si van hacer efectiva la convocatoria y el respectivo nombramiento de los cargos en propiedad, sea de forma igual; o dicho procedimiento se cobije a todos y cada uno de los cargos vacantes a la fecha que se hagan los nombramientos. (fls. 11-12)*

Frente a la configuración del perjuicio irremediable, el alto tribunal constitucional¹⁰ ha precisado:

*“[...] En primer lugar, el perjuicio **debe ser inminente o próximo a suceder**. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, **la causa del daño**. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un **detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona** (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una **respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio**, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser **impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable**”.¹¹
Resaltado fuera de texto.*

En consecuencia, para el Despacho no resulta palpable la presencia de un perjuicio irremediable que deba protegerse de manera urgente e inmediata, pues la medida simplemente busca se abstenga de efectuar nombramientos y posesiones en el marco del concurso de méritos convocado por Acuerdo CSJBA09-168 de 2009, sin embargo no se vislumbra las razones por las cuales la protección de dichos derechos no pueda esperar el trámite expedito de la acción de tutela y mucho menos que deba prevalecer esta petición frente a las expectativas legítimas de quienes adelantaron de buena fe todo el proceso de selección dentro de ese concurso.

Adicionalmente, con el escrito de demanda, el actor no aporta pruebas que sumariamente acreditan la inminencia en los nombramientos y el desconocimiento por parte de las accionadas de los derechos que le asisten, en lo referente al nombramiento del Profesional grado 12, pues la controversia gira en torno a los cargos de Profesional Universitario grado 11 y Técnico Grado 11; por el contrario suspender el nombramiento de una persona que superó todas las etapas de un concurso de méritos convocado hace **8 años**, implicaría desconocer los derechos que

¹⁰ Sentencia T-081 de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

¹¹ Sentencia T-1316 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

Accionante: William Cruz Forero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Expediente: 15001-2333-000-2017-00428-00
Acción: Tutela

le asisten de acceso a la carrera judicial, trabajo y mínimo vital, que se verían afectados si se accediera a la medida provisional, máxime cuando la situación en discusión no tiene relación alguna con el cargo de Profesional Grado 12, salvo, la salida del accionante de un cargo que ostentaba en calidad de **provisional**.

Por lo expuesto se resuelve:

- 1. Admitir la acción de tutela** presentada por William Cruz Forero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de carrera Judicial y Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.
- 2. Notificar este auto por el medio más expedito** a Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de carrera Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare para que en el término de **dos días** ejerzan su derecho de defensa en la presente acción.
- 3. Negar** la medida provisional solicitada por el accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
- 4. Ordenar** al Consejo Seccional de la Judicatura que en el término de **un día** publicar este auto en la página web de la Rama Judicial, en el link del concurso convocado por Acuerdo CSJBA09-168 de 09 de septiembre de 2009, así como el envío del mismo a los correos electrónicos de las personas que se encuentran en la lista de elegibles en el cargo de Profesional Universitario Grado 11 convocado por el Acuerdo CSJBA09-168 de 09 de septiembre de 2009.
- 5. Ordenar** a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial **comunicar** este auto a la persona que va ser nombrada o se nombró en el cargo de Profesional Universitario grado 12 – Coordinador de Área Administrativa, haciendo saber que puede intervenir en el término de **dos días** en la presente acción de tutela. Término **8 horas**. Del envío de esta comunicación, deberá informarse a la Secretaría del Tribunal en el término de **1 día**.
- 6. Comunicar** al accionante esta decisión por el medio más expedito como lo informa el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
- 7. Comunicar** al Ministerio Público – Delegado en asuntos administrativos, sobre la admisión de esta acción de tutela.

Notifíquese y Cúmplase.


CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Magistrada